

(S) 30 BH/40
R

SITUACION ARGENTINA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Setiembre de 1978.

1.- ANTECEDENTES:- Desde hace una década la República Argentina ha sufrido distintos episodios de violencia, cuyo génesis, proveniente en gran medida de la ausencia de legitimidad política, no cabe analizar en este breve documento.

A partir de 1974 se acentuó el fenómeno del terrorismo urbano y, en menor proporción de la guerrilla rural, focalizada en la provincia de Tucumán. Simultáneamente se desarrolló la violencia de extrema derecha cuyo origen, a diferencia de la subversión de ultrazquierda, era difícil de determinar, aunque con la perspectiva del tiempo resulta posible establecer sus inspiradores y ejecutores. El gobierno constitucional intentó, con poco éxito, a través de sus organismos de seguridad y de su aparato judicial controlar la situación, hasta el golpe de estado militar del 26 de marzo de 1976. Las fuerzas armadas, que con anterioridad a ese hecho político, intervenían directa y activamente en la represión, asumieron entonces la responsabilidad total de la denominada "guerra antisubversiva". Esta lucha, que ha adquirido marcados caracteres de persecución ideológica y social, ha proseguido sin interrupción desde ese momento abarcando sectores cada vez más amplios de la población.

2.- LA SITUACION:- La sociedad argentina, en su conjunto, incluyendo los partidos políticos y organizaciones sindicales, se ha pronunciado reiteradamente contra la violencia, ejercitada por grupos minoritarios — y ha aspirado que el Estado, asumiendo el monopolio de la coerción legítima y por medio de sus fuerzas de seguridad y sus órganos judiciales, corrigiera este estado de cosas. Lamentablemente ello no se ha producido. Por el contrario la represión, siguiendo una inocultable doctrina en ese sentido, ha utilizado en forma creciente los métodos del terrorismo, apolando al fácil expediente de la invocación de la "guerra sucia", del estado de necesidad y de la teoría de la seguridad colectiva como valor supremo, por encima de los principios éticos y de los valores inherentes a la dignidad de la persona humana. Con razón ha podido calificarse a la Argentina de Estado terrorista, por haber elegido los detentadores del poder la utilización sistemática y deliberada de los métodos clandestinos de lucha, que incluyen el secuestro, la tortura, el asesinato, el saqueo, las bombas y las distintas formas del terror.

El balance de este proceso, a mediados de 1978 y luego de casi dos años y medio de régimen militar, es pavoroso.

Desde 1974 el número de cadáveres, en su mayor parte sin posibilidades de identificación, hallados en lugares públicos, según la información periodística, alcanza a 4.000.- El lugar de aparición de muchos de ellos (playas del río de la Plata y del Océano Atlántico, fosas comunes etc.) indica que esa cifra es mayor. Nadie duda que provienen de la represión. Cuando son identificables la autoridad pública no da a publicidad sus nombres.

81F93
(51/52)

ARGENTINA PROJECT (S200000044)

U.S. DEPT. OF STATE, A/RPS/IPS

Margaret F. Grafeld, Director

() Release () Excise () Deny

Exemption(s):

Declassify: () In Part () In Full

() Classify as () Extend as () Downgrade to

Date Declassify on Reason

El Gobierno nacional ha publicado la nómina de casi 4.000 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en decir mediante un decreto firmado por el Presidente de la República que no indica la causa de la medida. La gran mayoría lleva más de dos años en esta situación y algunos alcanzan a cuatro. Pese a que el Gobierno Argentino sostiene que no existen presos políticos o de conciencia y que todos los detenidos lo son por actividades subversivas, es difícil calificar de otra manera a personas arrestadas por largos períodos sin acusación formal, sin proceso y en algunas ocasiones sin haber sido jamás interrogados. Por otra parte el tratamiento de esos presos en las cárceles es pésimo y sus condiciones de vida deplorables. El régimen instaurado tiende a su destrucción física y síquica. Se les prohíbe trabajar y leer; en algunos lugares se impiden las visitas; son castigados sin motivo frecuentemente; los golpes y vejaciones son habituales y se dan casos bien conocidos de asesinatos pretextando intentos de fuga o simplemente por el exceso de castigos especialmente en los traslados. Otros han sido secuestrados al ser puestos oficialmente en libertad y nada se ha sabido de ellos. Si bien es cierto que todos los meses se anuncian alrededor de un centenar de libertades, el número de arrestados permanece estable pues otros tantos ciudadanos son detenidos en la misma condición.

El derecho de opción para salir del país, que establece el artículo 23 de la Constitución Nacional para los detenidos a disposición del PEN durante la vigencia del estado de sitio, fué suspendido inmediatamente después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Ha sido formalmente restablecido en 1978, pero con tales limitaciones y cortapisas que, en la práctica, puede calificarse de inexistente. De hecho, sólo un reducido núcleo de presos, que no pasa la centena, ha podido gozar de ese beneficio y las autorizaciones se conceden con cuentagotas.

Pero la situación más grave y dramática que, desde este punto de vista enfrenta el país, es la de los denominados "desaparecidos". Como es sabido por todo el mundo y ha sido reiterado y probado ininidad de veces, los llamados "desaparecidos" son ciudadanos detenidos por la autoridad pública (Fuerzas Armadas u organismos de seguridad), que "desaparecen". Es decir, a partir de ese momento nada se sabe de ellos. Hay "desaparecidos" de tres, dos y un año y de varios meses atrás. Nadie conoce si están vivos o muertos. El Gobierno sostiene que no sabe nada de los mismos y que no figuran registrados como detenidos. Esta es la respuesta sistemática y casi mecánica que reciben los jueces cuando se dirigen al Poder Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas en los recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares; los Obispos de la Iglesia Católica y los ministros de otras confesiones religiosas; las organizaciones internacionales y las dedicadas a la defensa de los derechos humanos; los gobiernos extranjeros; los parientes y amigos. De vez en cuando alguno "aparece", Generalmente se oculta o sale del país, aterrorizado por el tratamiento recibido o en virtud de amenazas. Cuando se logra hablar con ellos cuentan procedimientos muy similares: han permanecido encanuchados o con los ojos vendados en lugares desconocidos (aunque la

mayoría intuye donde han estado y el carácter castrense o policial del sitio de detención); casi siempre encadenados, engrillados o esposados; han sido salvajemente torturados e interrogados; tienen conciencia de haber estado en contacto con decenas y a veces centenares de personas en la misma situación.

Para tener una idea clara de la situación que atraviesa la Argentina es importante procurar determinar el número de los "desaparecidos". Las tres organizaciones dedicadas al tema en el país (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuamericano por los Derechos Humanos y Liga Argentina por los Derechos Humanos del Hombre) poseen testimonios escritos de parientes de poco más de 3.000 personas detenidas, prima facie, por la autoridad pública o inmediatamente desaparecidas. En muchos casos existen abundantes pruebas de la intervención de las fuerzas armadas u organismos de seguridad. Esas asociaciones publicaron el 17 de mayo de 1978 en el diario "La Prensa" de Buenos Aires una solicitada conteniendo la nómina de 2.500. El 28 de julio del mismo año enviaron al Ministro del Interior una nota acompañando una lista de otros 500. Constantemente el número de testimonios crece. En los legajos de cada "desaparecido" se incorpora la certificación del recurso de hábeas corpus interpuesto por su familia y contestado negativamente por la autoridad. El Gobierno no ha publicado el número de denuncias sobre "desapariciones" que obra en su poder y que, sin duda alguna, su número holgadamente esa cifra. Tampoco ha dado a conocer una estadística de los recursos de Hábeas Corpus presentados a los tribunales. También el 17 de mayo de 1978 -- reiterando una presentación del año anterior -- un grupo de familiares de "desaparecidos" con el patrocinio de varios letrados, planteó la cuestión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañando la lista de los referidos 2.500 casos. La Corte, en ambas ocasiones, se ha declarado incompetente para intervenir....

En general se estima que el número de casos de "desapariciones" cuyos familiares presentan un testimonio escrito en las organizaciones mencionadas es muy inferior al total. Influye en esto el temor, la distancia, la ignorancia y la imposibilidad que tienen las entidades referidas para tener acceso a los medios masivos de comunicación. Un muestreo de una veintena de localidades en las cuales, por su extensión, es posible conocer los casos de "desapariciones" indica que hay que multiplicar por lo menos por cinco la cifra de 3.000. O sea que el número de detenidos y luego desaparecidos en ningún caso es inferior a 15.000. Otros observadores, con razones fundadas, lo hacen escender a 30.000. Entre ambos guarismos se encuentra sin duda la realidad. El Ministro del Interior, por su parte, ha manifestado en unas declaraciones del 26 de mayo de 1978 que los "desaparecidos" suman millares.

Importa señalar a este respecto que el Gobierno jamás ha encontrado a ninguno de estos "desaparecidos" pese a su reconocida eficacia en la lucha contra la subversión cuyas organizaciones -- manifiesta y los hechos lo corroboran -- ha destruido. Resulta contradictoria la reiterada afirmación de los integrantes del Gobierno que en el país reina la más absoluta tranquilidad y que Buenos Aires es más segura que

Londres, New York o Paris -- como se insistió para atraer visitantes durante el campeonato mundial de fútbol -- y que el mismo tiempo sean secuestradas centenares de personas por mes, a veces en plena luz pública, sin que los organismos de represión, tan eficaces para combatir la guerrilla, nunca encuentren a nadie. Por otra parte, después de dos años y medio de régimen militar y con la subversión erradicada, es difícil admitir que los Comandantes de las tres Fuerzas no logren controlar sus propias filas. La alternativa es de hierro: o el Gobierno militar, después de dos años y medio de establecido, no controla el país nissus cuadros -- eventualidad que es contradicha por los hechos --, o las fuerzas armadas son las responsables de los secuestros. El Presidente de la Nación ha intentado explicar con argumentos inverosímiles la causa de estas desapariciones, atribuyéndolas a los mismos desaparecidos o a venganzas de las organizaciones subversivas y ha admitido la existencia de errores y excesos en la represión. Pero el país no conoce ni un solo caso de sanciones contra los responsables de tales excesos.

La existencia de tantos miles de "desaparecidos" ha provocado un verdadero trauma en la sociedad argentina. La crueldad del procedimiento y la incertidumbre y la angustia a que da lugar tiene un costo moral, social y político incalculable. Constituye el obstáculo más grave para la legitimación del régimen y para cualquier proceso de democratización y de participación popular; en el futuro se erigirá en fuente de venganzas, investigaciones y exigencias de sanciones, con el daño consiguiente. El perjuicio que causa a la imagen argentina en el exterior contrasta con la insensibilidad del Gobierno frente a los incesantes requerimientos que, hasta el momento, nada obtienen. Las autoridades se niegan a proporcionar ningún dato sobre el destino de los "desaparecidos" y como nadie cree en sus explicaciones, alienta la incredulidad ciudadana sobre las expresiones de los gobernantes. Centenares de madres se reúnen cada jueves a las 15 y 30 horas, frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, en una demostración pacífica y silenciosa. Sólo piden noticias de sus hijos. Son frecuentemente filmadas y fotografiadas por periodistas extranjeros. El dramatismo de su actitud y los riesgos que enfrentan (trece de ellas fueron secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre de 1977 y no hay noticias de las mismas) constituyen un símbolo permanente del sufrimiento de millares de familias y de la voluntad de resistencia del pueblo frente a la opresión.

Los testimonios de secuestrados liberados y de presos bajo el PEN o procesados y la admisión en privado o con medias palabras y eufemismos de muchos oficiales, permiten aseverar sin lugar a dudas que las fuerzas armadas y de seguridad utilizan de manera sistemática y refinada la tortura, como el principal instrumento de investigación y sanción. Los relatos recogidos son innumerables y espeluznantes. Tampoco cabe duda que se realizan ejecuciones sumarias en forma clandestina, aunque por el sistema del secuestro se desconoce su número. En otros casos, particularmente de rehenes o como represalia, los asesinatos son públicos pero sus autores, a veces conocidos, no son sancionados. Existen igualmente vehementes indicios de la existencia de campos de concentración ocultos, donde estarían los "desaparecidos" sobrevivientes. ///

Estas referencias mantienen las esperanzas de la mayoría de las familias y limita sus reacciones frente a las autoridades.

A lo expuesto se agrega el saqueo sistemático -- justificado como botín de guerra y como necesaria compensación para los ejecutores -- de los domicilios de los secuestrados y detenidos y a veces de sus padres y parientes; la práctica habitual de obtener dinero para proporcionar referencias -- exactas o falsas -- sobre la suerte de los "desaparecidos"; las cesantías en masa en la administración pública y en la docencia, tanto pública como privada, de los agentes considerados sospechosos de desviación ideológica; y la rígida autocensura de prensa, sobre la base de prohibiciones, pautas y amenazas. Por su parte los sindicatos están en su mayoría intervenidos; el derecho de huelga ha sido suprimido y los partidos políticos se encuentran suspendidos en su actividad.

3.- IDEOLOGIA:- No se entiende la situación argentina, precedentemente descripta, si se parte de la idea, difundida con frecuencia, que los hechos señalados son consecuencia de excesos ocasionales, de una reacción espontánea de la sociedad o de una falta de control por parte de las autoridades militares. Sin duda hay desbordes, pero su existencia deriva del sistema adoptado. En efecto. Lo que ocurre en Argentina, según puede advertirse claramente después de más de dos años de gobierno militar, es la aplicación de un sistema, fundado en una ideología. El sistema consiste en la decisión política y estratégica de las Fuerzas Armadas -- adoptada probablemente a mediados de 1975, cuando el general Videla se hizo cargo de la comandancia en jefe del Ejército -- de combatir a la subversión -- o a todo aquello que el régimen denomina subversión -- en forma clandestina, con métodos terroristas y al margen no solamente de la ley penal y de la estructura judicial, sino también de los organismos de seguridad regulares. Una prueba terminante de esta afirmación surge de la siguiente cifra: puede estimarse en alrededor de 100.000 el número de personas involucradas en la represión, entre muertos, "desaparecidos", presos en algún momento, exiliados huyendo de la persecución, investigados, dejados cesantes por motivos ideológicos etc. Ahora bien. Según datos oficiales hay en la Argentina 800 procesos por subversión (500 en los juzgados civiles federales y 300 en la justicia militar), o sea un 1% escasamente del total de sospechosos. Cabe señalar además que los 500 procesos referidos fueron iniciados con anterioridad al 24 de marzo de 1976, aún cuando las sentencias, en los casos concluidos, hayan sido dictadas con posterioridad. Es conocido además que ni la pena de muerte, prevista en el código penal ni penas graves han sido aplicadas por los tribunales civiles y no hay información que hayan sido dispuestas por los juzgados castrenses. Se ha repetido en cambio incesantemente en discursos y declaraciones de los actuales gobernantes que los integrantes de las organizaciones subversivas son "irrecuperables" y que deben ser eliminados. El general Videla, poco después de haber sido nombrado comandante en jefe del Ejército, en octubre de 1975, afirmó en un discurso en Montevideo que "si es preciso en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para

lograr la seguridad del país" (conf.: "Clarín", 3 de mayo de 1978).

No cabe duda que una vez instaurado un aparato de represión autónomo; dividido como la guerrilla en forma celular; con facultades para investigar, secuestrar, mantener detenidos no declarados indefinidamente, torturar, saquear y asesinar, se pierde el control de sus acciones y se llega a la situación presente en la cual los conflictos internos de las fuerzas armadas y de las fracciones gobernantes se dirimen de la misma manera. Pero no exime de responsabilidad a quienes, no solamente dispusieron este sistema, sino que lo mantienen a través del tiempo, sin que se hayan dado pasos, al menos visibles, para eliminarlo.

El sistema descripto, por cierto, responde a una doctrina. Es la denominada teoría de la seguridad nacional, a la cual se supeditan los valores y principios esenciales de varios milenios de civilización. Se funda en la creencia que el fin justifica los medios y que la represión -- como ha llegado a sostenerse en discursos y declaraciones -- está al margen de cualquier consideración ética, jurídica o simplemente humana. Lo único que interesa, se ha dicho, es el éxito, no importa a qué precio. Se pretende igualmente que solo la historia podrá juzgar la acción de los integrantes de las fuerzas armadas, como si éstos estuvieran exentos de responsabilidad moral, política y penal y se pretende echar un manto de olvido sobre los hechos reseñados. Esta concepción, de tipo totalitaria, cualquiera sean las afirmaciones democráticas que se declamen, involucra a las fuerzas armadas y a ciertos sectores de la sociedad argentina, particularmente los de mayor poder económico y a grupos de clase media fácilmente influidos por la tenaz propaganda oficial, que procura asimilar la defensa de los derechos humanos realizada tanto en el interior como en el exterior del país a un ataque a la soberanía y a la comunidad argentina. Es curioso también que la ideología reseñada se presente como compatible con los principios y valores cristianos, cuando es fácil advertir su total contradicción con la doctrina judeo-cristiana.

4.- EL MOMENTO ACTUAL:- Es sumamente importante señalar que el aparato represivo, como ha sido descripto precedentemente, prosigue su labor sin cambios de ningún tipo, pese a la anunciada erradicación de las organizaciones armadas subversivas. No hay ninguna atenuación. Por el contrario, los meses de mayo, junio y julio de 1978 han visto aumentar el número de secuestros y de operativos ilegales con respecto a las cifras de marzo y abril. Se oye igualmente con frecuencia en los incontables discursos oficiales, que ahora comienza la lucha contra la denominada "subversión ideológica", entronizada, según se afirma, en la enseñanza, los medios intelectuales, las confesiones religiosas, los sindicatos y otros ámbitos. Se habla también de la lucha permanente contra la subversión y, con tono mesiánico, se sostiene que la Argentina, frente a la debilidad del mundo occidental, al cual se pretende pertenecer pese a que se nieguen sus valores históricos, se encuentra a la vanguardia de la tercera guerra mundial y que ya ha ganado, en forma definitiva, su batalla y está en condiciones de aleccionar a

los países democráticos, exportando sus métodos antiguerrilleros. Si se examinan con atención las declaraciones oficiales se advertirá que éstas nunca responden de manera concreta a los hechos planteados y criticados. Frente a éstos sólo hay un prolongado silencio. Nunca se aclara la situación de ningún "desaparecido", aunque sobreabundan las pruebas de la intervención de las fuerzas armadas o de seguridad. Todo se reduce a sostener que la Argentina está en guerra; que en la guerra hay muertos y desaparecidos; que no se comprende a las autoridades; que se trata de una "guerra sucia" y no querida; que no hay otra forma eficaz de actuar. En rigor de verdad una tática y a veces expresa -- especialmente en privado -- admisión de lo explicado en los numerales anteriores.

Por todo ello el Gobierno Argentino considera cualquier preocupación por los derechos humanos, cualquiera sea su procedencia, como un arma de la subversión. Ello engloba a las organizaciones dedicadas a ese tema, tanto nacionales como internacionales; a las comisiones de los organismos interamericanos; a las iglesias; a los gobiernos extranjeros; a los partidos políticos.

Las organizaciones argentinas dedicadas a la defensa de los derechos humanos centran en este momento sus requerimientos en cuatro puntos muy concretos y realmente elementales. Son ellos: (a) Información, por parte del Gobierno, de la suerte de los llamados "desaparecidos". Esto es esencial y un Estado civilizado no puede eludirlo. (b) Cesación de los procedimientos ilegales y clandestinos y consecuente utilización en la represión del aparato judicial y legal. (c) Procesamiento o, en su defecto, liberación u otorgamiento del derecho de opción para salir del país, para los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; (d) Mejora sustancial del tratamiento de los presos en las cárceles.

Se trata, como se advierte, de solicitudes prioritarias y elementales. No se piden libertades, ni amnistías ni menos que el Estado, en ejercicio de sus deberes y derechos, abandone la función de salvaguardia de la seguridad pública y la sanción, a través del debido proceso legal, de los delitos y crímenes, tanto comunes como políticos. Todos, iglesias, partidos políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, están decididamente en contra del terrorismo, venga de donde venga y de la violencia. Cada día son más las voces que se alzan, incluso dentro de los partidarios del actual régimen, solicitando la vuelta a un estado de derecho. Un Estado fuerte, en condiciones de reprimir los actos de violencia, pero dentro de un marco legal. Un Estado que imponga disciplina a sus propias fuerzas armadas, en alguna medida anarquizadas, como única garantía frente al instinto de venganza y al furor homicida, derivado del fanatismo y de su inevitable secuencia, la corrupción y la degradación.

Lamentablemente no se vislumbra hasta el momento ningún progreso en ese sentido. Sólo palabras, millones de palabras vacías, cada vez más genéricas, sin correspondencia con los hechos. Los últimos cambios en el esquema de poder nada han significado. Las escasas atenuaciones -- arrestos domiciliarios y unas pocas libertades o "apariciones" --

son gestos minúsculos y en general corresponden a situaciones que pueden tener alguna significación política pero que no involucran a los hechos más graves y masivos.

Y cada día que pase sin una decisión en el sentido indicado antes, supone la prolongación de los sufrimientos y de los riesgos y torna más difícil encontrar soluciones.

5.- EL FUTURO:- Surge de lo expuesto que el futuro del país, a corto y mediano plazo, resulta imprevisible y ofrece una perspectiva pesimista. La política ha sido subordinada a la denominada "guerra antisubversiva" en vez de ocurrir lo contrario. En muchos espíritus y particularmente en los miembros de las fuerzas armadas y en ciertos sectores sociales, se da una verdadera deformación moral e intelectual. Otros grupos, por interés, venalidad u oportunismo se suman al coro de los aduladores y niegan o justifican hechos evidentes, como se advierte en la lectura de las declaraciones y solicitudes que inundan los diarios. Se advierte como aflora la cobardía, el ocultamiento de la verdad, la tendencia a cerrar los ojos y los oídos, como en la Alemania de Hitler. La libertad de expresión en estos temas no existe y se está constantemente expuesto a la desaparición o al atentado. Los últimos episodios de este tipo derivan, aparentemente, de conflictos internos de los sectores gobernantes.

Dentro de este cuadro y en relación con el porvenir de la sociedad argentina existe una situación particularmente grave. Se trata del secuestro de niños de corta edad y de la ignorancia por parte de sus familias de los nacidos de madres embarazadas en el momento de su detención. Los abuelos, pese a sus incesantes gestiones, no logran obtener noticias de sus nietos en esas condiciones ni por lo tanto su custodia. Existen indicios que algunos de esos niños han sido otorgados en adopción a hogares ajenos, con la pérdida de su identidad. Esto supone, lo mismo que las venganzas con parientes inocentes de presos, muertos o desaparecidos, un descenso hacia la barbarie, sólo concebible en comunidades tribales o primitivas, anteriores a las formas más elementales de civilización.

En un momento en el cual todas las instancias (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Episcopado, organismos internacionales) parecen agotadas, se impone una denuncia vigorosa y una reacción de la sociedad argentina. Un real sinceramiento y una decisión unánime para salir de esta situación y lograr la paz y la reconciliación interna. Pero ello sólo será posible con la verdad, la integridad de la conducta, la comprensión, el amor al prójimo, el respeto por la dignidad humana, la generosidad y la justicia.

Para que esto tenga lugar es indispensable encarar problemas prioritarios y fundamentales, como la información, por parte del Gobierno, del destino de los detenidos y desaparecidos; la cesación y abolición de los procedimientos irregulares y de la tortura; el procesamiento, la libertad o la autorización para salir del país de los arrestados bajo el PEN; la humanización de las condiciones de vida en las cárceles; la libertad de expresión y la sanción de los responsables de los hechos violatorios de los derechos humanos.

Estos objetivos son, como se dijo antes, urgentes y priori-

///

tarios. Aunque existe conciencia que no serán logrados en plenitud si no se arriba, al mismo tiempo, a la restauración de la democracia, del sistema constitucional y de un poder judicial independiente.

Buenos Aires, setiembre de 1978.